

Suprema Corte:

-I-

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que había rechazado el pedido de nulidad de la resolución denegatoria de la pensión solicitada sobre la base del artículo 34, inciso 1, del decreto-ley 9650/80 de la provincia referida (v. fs. 2/8 vta. y 51/55 del cuaderno de queja, al que me referiré en adelante).

Para así decidir, la Suprema Corte de Justicia provincial entendió que el agravio relativo a la falta de tratamiento del planteo de inconstitucionalidad era infundado porque la cámara lo había abordado expresa y suficientemente, y lo había rechazado con fundamento en la remisión hecha a la letra del régimen legal bajo análisis (en particular, al artículo 34, inciso 1, apartado c, del decreto-ley 9650/80).

Por otra parte, entendió que tampoco procedía el agravio relativo al exceso de rigor formal en la interpretación de las normas que regulan la obtención del beneficio previsional y en la valoración de la prueba que había hecho la cámara para concluir que la actora no cumplía los recaudos específicos exigidos. La Suprema Corte de Justicia provincial sostuvo que las cuestiones de hecho y prueba no pueden ser revisadas por ella en la instancia extraordinaria a menos que se alegue y se demuestre la existencia de absurdo.

-II-

Contra tal pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario que, al ser denegado, motivó esta presentación directa (v. fs. 9/20, 28/29 y 31/35 vta.).

Explica que solicitó al Instituto de Previsión Social local el beneficio de pensión derivado del fallecimiento de su padre viudo, jubilado de dicho organismo. Relata que, para ello, acreditó el vínculo paterno filial, una pública convivencia de larga data, tener 53 años de edad, estar a cargo económicamente del causante, haberle asistido en las enfermedades previas a su muerte, no poseer ingresos o rentas, tener una incapacidad de ganancia y estar divorciada por el artículo 67 bis de la ley 2.393.

Precisa que el beneficio solicitado le fue denegado porque su situación no encuadra en el artículo 34, inciso 1, apartado *b*, del decreto-ley 9650/80, que no prevé como beneficiaria a la hija divorciada. La actora tacha de inconstitucional dicha norma por ser contraria al derecho a la seguridad social, la protección de la familia, el derecho a la igualdad y no discriminación, y el derecho a la propiedad, entre otros (artículos 14 bis, 16, 17, 18, 31 y 75, incisos 22 y 23).

Considera que se la discrimina en comparación con las hijas solteras, viudas, y separadas o divorciadas por culpa exclusiva del marido (situación contemplada en el apartado *c*). Objeta que se le otorgue un estatus inferior por el mero hecho de haberse casado y divorciado por mutuo consentimiento, circunstancia que en nada debería repercutir en su pretensión de obtener un beneficio previsional derivado de la muerte de su padre.

Por otra parte, la actora se agravia por entender que el *a quo* actuó con arbitrariedad pues se corroboró por medio de testigos que el divorcio fue causado excluyentemente por culpa de su ex esposo. Asimismo, critica que se haya confirmado la errada evaluación realizada por la cámara sobre la incapacidad de ganancia que le afecta. Al respecto, entiende que se ha probado suficientemente su estado de deterioro psicofísico, a lo que cabe agregar su falta de aptitud para producir ganancias debido a su escaso nivel de educación, su avanzada edad y su falta de actividad lucrativa en razón del tiempo que dedicaba al cuidado de su padre.

—III—

La sentencia definitiva del tribunal superior de la causa ha sido contraria al derecho que la recurrente funda en los artículos 14 bis, 16, 17, 18, 31 y 75, incisos 22 y 23, de la Constitución Nacional, y en diversas normas de tratados internacionales con jerarquía constitucional. Por ello, entiendo que el recurso extraordinario interpuesto es admisible (artículo 14, inciso 3, de la ley 48).

Asimismo, por las razones que expondré a continuación, opino que también son admisibles los agravios de la actora relativos a la arbitrariedad en la valoración de la prueba y la determinación de los hechos que realizó el *a quo* en relación con la incapacidad de ganancia que le afecta.

—IV—

El *a quo* rechazó el agravio de la recurrente relativo a la falta de tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del artículo 34, inciso 1, del decreto-ley 9650/80 por entender que éste sí había sido abordado por la cámara. En apoyo de esta afirmación, citó un fragmento de la sentencia de la cámara en el que ésta sostenía que “para la objeción de constitucionalidad construida en la demanda, basta por toda respuesta con remitirse a la letra del régimen legal analizado extensamente a lo largo de esta intervención (art. 34 inc. 1 c) decreto-ley 9650/80). Se descarta así la exclusión que predicara la parte actora el inicio de este proceso” (fs. 5).

Sin embargo, remitirse a la letra de una norma legal no satisface la obligación de abordar una objeción constitucional en la que la actora reprocha precisamente que la norma legal la excluya injustamente. La situación de la actora no está contemplada en el apartado *c* —contrariamente a lo que fue sostenido por la cámara (fs. 53)— en tanto se divorció por presentación conjunta (67 bis de la ley 2393), y no por culpa exclusiva de su ex marido. Es justamente ese requisito —que la excluye del artículo 34,

inciso 1— lo que ha sido tachado de inconstitucional a la luz del derecho a la igualdad y a la no discriminación, en relación con el derecho a la seguridad social, la protección de la familia y el derecho a la propiedad. En efecto, la actora entiende que diferenciar su situación del caso de las hijas solteras, viudas, y separadas o divorciadas por culpa exclusiva del marido, para negarle a ella lo que les concede a éstas, constituye una discriminación irrazonable. En efecto, la circunstancia de haberse divorciado por mutuo consentimiento —en lugar de por culpa exclusiva del marido— no parece tener ninguna relación con la pretensión de la actora de acceder a un beneficio previsional derivado del fallecimiento de su padre, en especial, teniendo en cuenta que no percibe alimentos por parte de su ex marido.

Al respecto, cabe recordar que, según la doctrina de la Corte Suprema, si bien las leyes pueden establecer diferenciaciones legítimas, “el criterio de distinción no debe ser arbitrario o responder a un propósito de hostilidad a personas o grupos de personas determinados (Fallos: 229:428), o tratar desigualmente a personas que están en circunstancias de hecho esencialmente equivalentes (Fallos: 229:765)” (Fallos: 332:433, considerando 5°).

Asimismo, cabe tener presente que, tal como resalta la actora, el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer dispone expresamente que las mujeres deben gozar de todos sus derechos humanos fundamentales “independientemente de su estado civil”.

—V—

Por otra parte, en relación con la acreditación del requisito de incapacidad para el trabajo que exige el apartado c, el agravio de la recurrente —que tacha de arbitraria la valoración de la prueba realizada por la cámara— es atendible porque la cámara no valoró adecuadamente elementos probatorios conducentes para resolver la cuestión. Por ello, este agravio también debió haber sido tratado por el *a quo*.

La sentencia de la cámara resolvió que las pruebas rendidas en la causa —tendientes a demostrar la edad avanzada de la actora, su estado de salud psicofísico (en particular, la presencia de un cuadro depresivo y diversas hernias de disco, entre otras dolencias), y su escaso nivel de educación y de experiencia laboral— eran insuficientes para tener por acreditada su incapacidad de ganancia. Sin embargo, esta afirmación luce dogmática, en tanto no se realizó un examen crítico de los diferentes elementos aportados ni se dispuso medida alguna para despejar las eventuales dudas que tuviera el tribunal —accionar factible y justificado por la delicadeza de la materia—.


—VI—

Por lo expuesto, opino que corresponde declarar admisible el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia recurrida.

Buenos Aires, 6 de MARZO de 2014.

ES COPIA

IRMA ADRIANA GARCÍA NETTO


ADRIANA N. MARCHISIO
Prosecretaria Administrativa
Procuración General de la Nación